



Máxima Acuña de Chaupe simboliza la resistencia antiminera de Celendin

Precio
S/. 1.00

Lucha Indígena

LLAPA RUNAQ HATARIYNIN

Director: Hugo Blanco

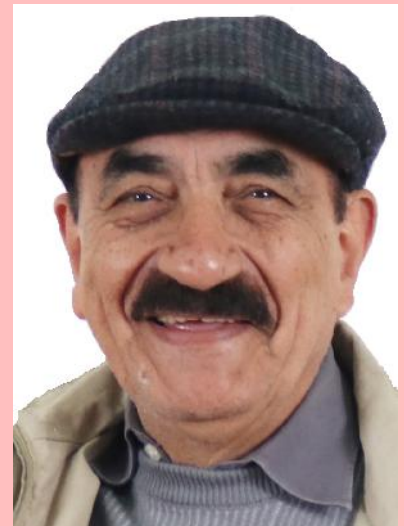
Año 13 agosto 2018 N° 144



Los de abajo, ordenan
Los de arriba, acatan... o se van



Entrevista a
Enrique Fernández
Chacón
"Cochero"
Candidato a la
alcaldía de Lima por
el Frente Amplio



Corrupción

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Corte Suprema de Justicia y la Corte Superior del Callao han sido protagonistas de reparto de cuotas de poder, tráfico de influencias y otros hechos de corrupción.

El Sistema de Justicia está en crisis. Los altos miembros de él son protagonistas de tráficos de favores, trampas en los exámenes de jueces y fiscales, atropello sexual a menores, manipulación de sentencias.

En algunas de las grabaciones aparece el nombre de Matín Vizcarra, Presidente de la República

El pueblo peruano se movilizó masivamente repudiando esa corrupción, cerca de cincuenta mil personas en la ciudad de Lima y en el resto del país alrededor de medio millón. Exigieron la remoción completa del Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual sucedió. También renunció Duberlí Rodríguez, titular de la Corte Suprema de Justicia.

Las manifestaciones no eran sólo contra la corrupción judicial, sino también contra el parlamento unicameral dominado por el corrupto fujimorismo y sus cómplices, que aprovechan ese poder para cometer actitudes descaradas de corrupción en provecho de ellos. Por eso el pueblo exigía nueva Constitución.

¿Cuál es el remedio? ¿Poner jueces no corruptos? Por supuesto los hay, pero ¿Quién nos garantiza que no se corrompan una vez arriba?

Cada día vemos el proceso de corrupción de gente honrada: Dirigentes sindicales, dirigentes de partidos de izquierda y de diversas organizaciones populares, que cuando fueron elegidos eran gente honrada pero "el poder" les ofreció ventajas personales que los impulsaron a aprovecharlas.

El único remedio es que gobierne la colectividad en su conjunto, no ningún individuo.

Eso sucede en las comunidades indígenas, en que el presidente electo no gana sueldo y cualquier medida importante debe disponer la asamblea comunal, no el presidente. En una ocasión estuve en una elección comunal, propusieron el nombre de un compañero para presidente comunal. El propuesto pidió la palabra y dijo: "Compañeros, yo ya he servido en muchas cosas a la comunidad, por favor, nombren a otro que todavía no haya servido".

El gobierno de la colectividad y no del individuo también sucede en Rojava, población de kurdos, árabes y de otras nacionalidades en una región de Siria.

Eso pretendemos que suceda en Lima como se podrá ver en la entrevista que hizo Pepe Mejía, nuestro corresponsal en Europa, a Enrique Fernández, candidato por el Frente Amplio a la alcaldía de Lima.

"LUCHA INDÍGENA"
 Editora "Lucha Indígena" RUC: 10060967194
 Director: HUGO BLANCO GALDOS
 Editor: Enrique Fernández Chacón "Cochero"
 Email: cefch70@hotmail.com
 Calle Vesta 361 - Rimac - Lima - Perú
 Telf: cel. 978 418 216
 Comité de Redacción:
 Corresponsal en Europa: Pepe Mejía
 Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú 2008-01061

luchaindigena@gmail.com

HUGO BLANCO DA CUENTA

Participo en la celebración del 15 aniversario de la organización "Programa Democracia y Transformación Global", que incluyó visita a Celendín, población que se enfrenta valientemente al proyecto de minería a cielo abierto "Conga" que intenta envenenar el agua que bebe la población y que la sostiene económicamente dedicada a la agricultura y la ganadería.

Tuve contacto con personas de Chumbivilcas, Cusco que también luchan contra el envenenamiento del agua.

Grabaron mi información sobre mi participación en diferentes luchas populares por la tierra contra el latifundismo semifeudal el cual abolimos y contra ataques a la naturaleza por la minería a cielo abierto.

Participé en la marcha contra la corrupción en Lima, con el "Cochero" Fernández y el Frente Amplio

Perú

Popularidad de Congreso y Justicia por los suelos

En una calificación del 0 al 20 al estilo escolar, peruanos ponen 06 de nota al Congreso que alcanzó su impopularidad más alta en los últimos treintaicinco años.

En un contexto de crisis económica, la corrupción y la percepción de que no hacen nada explican el malestar de la ciudadanía hacia los parlamentarios.

El otro gran desaprobado por el pueblo fue el Poder Judicial con 7.2 de calificación en un rango del 0 al 20. Los audios publicados por el portal IDL-Reporteros que demostrarían un presunto tráfico de influencias al más alto nivel del sistema de justicia, generó un masivo pedido de renuncia.

La bancada oficialista presentó una denuncia constitucional contra los miembros del

Consejo Nacional de la Magistratura Iván Noguera, Julio Gutiérrez y el juez supremo César Hinojosa, quien tiene antecedentes por favorecer narcotraficantes. El presidente del congreso Luis Galarreta anunció que el parlamento iniciará una investigación en la subcomisión de acusaciones constitucionales.

La revelación de los audios de IDL reporteros es un nuevo golpe para la justicia peruana y un agravante para la crisis institucional en el país. La celeridad y el rigor con que se investigue a los magistrados, mostrará si hay voluntad política en el consejo nacional de la magistratura, el Gobierno y el congreso para combatir la corrupción.



Enrique y Hugo, Obrero y Campesino, en un fraternal abrazo de recuento físico



Crece la campaña de solidaridad con Rodney Álvarez al cumplir 7 años como preso político sin juicio

Venezuela, Caracas 20 de junio.- Rodney Álvarez, un joven obrero de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, ubicada en el suroriente de Venezuela, cumplió este 17 de junio siete años como preso político, encarcelado y privado del derecho a defenderse en un juicio.

Se le acusa de un crimen que no cometió. Los gobiernos de Chávez y Maduro lo han mantenido en los hechos secuestrado en el sistema penitenciario venezolano, uno de los más peligrosos e inhumanos del continente, para encubrir a los verdaderos autores del crimen que se le imputa, el asesinato del trabajador Renny Rojas, quien fue baleado por la burocracia sindical del PSUV durante una asamblea de trabajadores. Los esbirros de la burocracia sindical atacaron la asamblea a balazos porque sabían que perderían la elección de la comisión electoral y luego perderían el control del sindicato, control que habían obtenido por vías mafiosas cuando el gobierno encarceló entre 2009 y 2011 al dirigente sindical Rubén González. Rodney Álvarez se encuentra

en la asamblea que fue atacada por la burocracia en aquel momento y decenas de testigos señalan a Héctor Maicán, del PSUV, como el autor de los disparos.

La historia de Rodney Álvarez, el preso político más antiguo del país, refleja la política antiobrera del chavismo y su brutal desprecio por la libertad sindical y los derechos humanos. Pese al cerco tendido por los medios estatales, por el chavismo y por la oposición patronal, que nunca lo ha incluido en las listas de presos políticos, su caso ha alcanzado una difusión cada vez mayor gracias a una persistente campaña de solidaridad por parte de sus compañeros de Ferrominera del Orinoco y las empresas básicas de Guayana, sus abogados, la corriente sindical C-cura y el Partido Socialismo y Libertad que siempre le han acompañado en decenas de audiencias en las que, una y otra vez, se pospone el juicio; así como organizaciones de derechos humanos como Provea, periodistas independientes, y medios alternativos como Laclase.info.

JUEZ ORDENA AL MINISTERIO DE SALUD CUMPLIR CON APROBAR SU REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN 30 DÍAS

El Juez del Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de cumplimiento de las organizaciones indígenas y ambientales ONAMIAP, CNA e IDLADS, contra el Ministerio de Salud para que dé cumplimiento a la Primera Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que estableció que las autoridades competentes, entre ellas la demandada, elaboren o actualicen sus normas relativas a la evaluación de impacto ambiental en un plazo de 180 días calendarios, plazo que venció el pasado 25 de marzo del 2010.

Al haber transcurrido más de ocho años de omisión de reglamentar la protección ambiental en materia de salud, finalmente el Juez ha dejado sentado que no existe justificación alguna por parte del sector, para explicar la demora excesiva, razón por la que ha ordenado a cumplir con lo dispuesto en el plazo de 30 días hábiles.

Ello resulta clave para implementar planes de salud interculturales para enfrentar casos de emergencias ambientales y sanitarias cuando ocurran desastres naturales u ocasionadas por actividades productivas como el

tratamiento y transporte de residuos sólidos y peligrosos como ocurre cuando existe un derrame de petróleo en la Amazonia o la contaminación por relaves mineros en las zonas andinas.

Es importante mencionar que el juez ha considerado entre sus fundamentos el Informe de la Defensoría del Pueblo N° 006-2016-DP/AMASPPI.MA sobre el balance de evaluación de impacto ambiental en el Perú, que señala al Ministerio de Salud como una de las autoridades con obligación pendiente de aprobar su reglamento de protección ambiental para lograr la efectiva identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales derivados de los proyectos de inversión, de acuerdo a las normas de evaluación de impacto ambiental contempladas en el «Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental».

El Dato: Esta demanda fue iniciada el 05 de abril del 2017.

Lilyan Delgado - IDLADS PERÚ

Lima, 02 de julio de 2018

PIURA:

Rondas campesinas se pronuncian frente a estrategias de Río Blanco Cooper

A las autoridades del gobierno central, regional de Piura, provincial de Huancabamba y distrital de Carmen de la Frontera, a las instituciones públicas que resguardan la protección de los derechos de las comunidades originarias y ancestrales del Perú; así como a los medios de comunicación regional de Piura y nacional radial, televisiva y de prensa escrita.

A todos ellos, las organizaciones de base de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Huancabamba, nos dirigimos para expresar que en asamblea de autoridades comunales y ronderiles, el domingo 8 de julio de 2018 en la Casa de las Rondas Campesinas de Huancabamba, acordamos expresar lo siguiente:

Las comunidades y rondas campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) se reafirman en lo expresado en la Consulta Vecinal del 2007 y en las distintas manifestaciones públicas y pacíficas realizadas desde entonces, en rechazo rotundo a la actividad minera y en favor de un tipo de desarrollo basado en la actividad agrícola, ganadera y de turismo sostenible. Rechazamos las estrategias que la empresa minera Río Blanco Copper viene empleando para conseguir la licencia social, que claramente ha sido negada por nuestras comunidades. Entre ellas tenemos la conformación de organizaciones con supuestos fines de dialogar o proponer proyectos de desarrollo en esta región; la infiltración en nuestras organizaciones para generar conflictos y divisionismo; o la recolección de firmas a

cambio de dádivas o dinero a través de sus promotores.

Rechazamos que la Universidad Nacional de Piura haya firmado un convenio de cooperación institucional con la empresa minera Río Blanco Copper, con supuestos fines de capacitación juvenil en Ayabaca y Huancabamba; sin tomar en cuenta que se trata de una empresa cuyo actuar ha dejado un saldo 10 personas muertas, personas discapacitadas, viudas y huérfanas; y la desconfianza sembrada en nuestras organizaciones a raíz de sus intentos de convencimiento.

Rechazamos el actuar clandestino y autoritario que Río Blanco Copper (Ex Majaz) tiene desde sus inicios. Es así como, en relación a su oficina, clausurada por la Municipalidad Provincial de Huancabamba, esta seguiría funcionando de manera clandestina y violando la disposición municipal.

Afirmamos que la empresa minera Río Blanco Copper vulnera nuestros derechos fundamentales reconocidos y amparados en la Constitución Política del Perú, en la Ley 24656 – Ley General de Comunidades Campesinas, Ley 27908 – Ley de Rondas Campesinas, Ley 24657 – Ley de Tierras, Ley 29785 – Ley de Consulta previa; así como en otros instrumentos de protección internacional como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.

Por ello, en nuestra calidad de guardianes de nuestro ecosistema de páramos y bosques de neblina, seguimos vigilantes y en pie de lucha, exigiendo al Estado peruano y demás autoridades competentes que cumplan con su rol garante del respeto a nuestros territorios y derechos colectivos, como corresponde a los valores y principios de un Estado democrático y pluricultural. No hacemos avalar el proceder ilegal y arbitrario de la empresa minera Río Blanco Copper.



Aideseop:

Hidrovia Amazónica debe detenerse si no hay diálogo

Proyecto avanza con rapidez y sin suficiente diálogo y participación indígena, indicó Lizandro Cauper, líder de Aideseop. Estudios sobre impactos del proyecto «no están muy claros», remarcó. Dichos impactos pueden afectar el ciclo vital de los ríos, que a su vez impactarían en la alimentación de las comunidades.

De Servindi

El proceso de la Hidrovia Amazónica avanza pero las inquietudes y temores por sus impactos en las comunidades ribereñas persisten.

Así lo advirtió Lizandro Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aideseop), al considerar que el proceso avanza con rapidez pero sin suficiente transparencia y diálogo. En una entrevista con Canal N, Cauper invocó a paralizar momentáneamente el proceso debido a que está «yendo rápido», sin garantizar la participación de todos los actores, especialmente de los pueblos indígenas.

El líder de Aideseop también exhortó a una mayor transparencia en el marco del respeto de acuerdos ya asumidos.

«Trabajemos con transparencia y respetando los acuerdos», señaló Cauper, indicando que se avanza sin implementar lo ya planeado.

Esto último lo refirió respecto a que si bien hay espacios actualmente para el diálogo,

estos no han materializado la implementación de obras y servicios acordados previamente. Dragados y «malos pasos» El líder shipibo también expresó su preocupación por el impacto que traerían los dragados en los ríos, ya que estos afectarían los ciclos vitales en sus aguas.

Así, una de las principales consecuencias se daría en lo peces, trayendo un impacto directo en el consumo de este recurso para

las comunidades que subsisten de los ríos. «Nos preocupa la alimentación», expresó Cauper. Y es que los peces son un recurso prioritario para las comunidades amazónicas, siendo una de sus principales fuentes de alimentación.

Del mismo modo cabe indicar que existen diversos puntos fluviales denominados como «malos pasos», que son las zonas del río donde la navegación es difícil.

Ello debido a la presencia de peligros como la poca profundidad, ante lo cual se procede a dragar el fondo.

Cauper también enfatizó que los estudios de impacto ambiental deben considerar información científica, así como espiritual y la cosmovisión de los pueblos indígenas.

Y es que es la cosmovisión de estos pueblos desde donde se expresa la relación armónica y sostenible entre las comunidades y su entorno.

La Hidrovia Amazónica representa una amenaza para 424 comunidades nativas, sostuvo el líder de Aideseop.

Entre tanto, de acuerdo al portal América Economía, el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) debería estar culminado en setiembre, contando ya con dos de sus informes parciales aprobados, de los cinco.

Mientras estas y otras preocupaciones aún no estén resueltas ¿el proyecto debería seguir su avance?



Pobladores de Ocuviiri inician huelga indefinida por incumplimiento de cierre de mina Arasi que fuera ordenado por el OEFA

Pese a que el pasado 29 de mayo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó el cierre definitivo del Tajo y Botadero «Jessica» de la unidad Minera Arasi, ubicada en el distrito de Ocuviiri (Lampa) por la contaminación ocasionada en la cuenca Llallimayo, la empresa Aruntani SAC estaría operando con normalidad, así lo dio a conocer el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ocuviiri, Cosme Cari Huaynacho.

El alcalde Cari sostuvo que «las autoridades no se pronuncian, a pesar que los pobladores han estado a la espera de que esta empresa ya no opere pero continua haciéndolo hasta la fecha», dijo. Frente a esta situación los pobladores de

Ocuviiri iniciaron una huelga indefinida el lunes 9 de julio bloqueando la carretera que une Puno y Cusco (sector de Vilapata distrito de Ayaviri -Melgar), y exigiendo a Aruntani SAC la recuperación inmediata de la calidad de agua de los ríos contaminados por esta misma y su cierre definitivo.

En comunicación con Noti-

cias SER, uno de los pobladores declaró que la empresa no muestra interés en dialogar con la población para iniciar el proceso de remediación de la calidad del agua, «estamos a la espera de una comisión de Alto Nivel de la Presidencia de Consejos de Ministros para solucionar la contaminación de las cuencas de Jatun Ayllu, Llallimayo, Ayaviri y Chacapalca», asimismo añadió que no levantarán la medida de lucha hasta que los ministros, representantes del OEFA y la ANA, y la empresa minera se presenten a dialogar. «vamos a hacer respetar nuestros derechos, no es un favor que le pedimos a las autoridades es su deber», puntualizó.



La corrupción del sistema de justicia y los defensores ambientales

CooperAcción, 12 de julio, 2018.-

Los audios difundidos por IDL Reporteros revelan la manera cómo se ha enquistado la corrupción en las más altas instancias del Estado. Lamentablemente, la realidad siempre termina superando la imaginación.

En este caso, jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura muestran la manera cómo se imparte la justicia en el país; cómo se expande la telaraña de la corrupción amarrando nombramientos, repartiendo favores, pidiendo con descaro el vuelto y cómo se define la suerte en los procesos: «¿Qué es lo que quieren? ¿Qué le baje la pena o que lo declare inocente?», es la terrible respuesta del juez supremo César Hinostroza Pariachi a un interlocutor no identificado sobre un caso —nada menos— de violación de una niña de 10 u 11 años. Terrible y nauseabundo. Todo parece podrido en nuestro sistema de justicia. Una primera reacción natural al escuchar estos audios, es vincularlos con algunos hechos dramáticos de nuestra realidad y el quehacer cotidiano: son estos jueces los que supuestamente tienen que impartir justicia en los casos de feminicidios y violencia infantil que se multiplican.

Por ejemplo, en el caso que se ha revelado,



el mismo juez falló en contra de un pedido de Arlette Contreras, víctima de violencia de género; además, permitió archivar el caso de lavado de activos que involucraba a los líderes de Fuerza Popular; entre otros fallos polémicos.

Es este mismo sistema de justicia el que actúa en los casos de tantos hombres y mujeres defensores ambientales que vienen siendo criminalizados en el país y que enfrentan procesos en diferentes instancias a nivel nacional.

Luego de escuchar los audios, cómo no pensar en los centenares de dirigentes sociales

que son procesados a lo largo y ancho del país y que enfrentan los diversos estamentos del sistema judicial: según las cifras que maneja la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, son 936 procesados actualmente a nivel social por diferentes conflictos sociales, la gran mayoría por temas socio-ambientales. Más aún, sabiendo que en estos casos la justicia opera bajo fuerte presión de intereses privados (que muchas veces actúan a través de grandes estudios de abogados) y del propio Estado, que buscan neutralizar la labor de los defensores ambientales.

Por la propia experiencia de nuestro trabajo

institucional, estos dirigentes enfrentan, por lo general, los procesos en condiciones tremendamente difíciles, sin posibilidades económicas para tener una adecuada defensa y para complicar aun más las cosas, en jurisdicciones alejadas: dirigentes de Cajamarca que tienen que ir a las audiencias durante años en Chiclayo o dirigentes de Espinar que han enfrentado sus procesos en Ica. Uno de los casos más notorios es el del ex alcalde de Espinar, Oscar Mollohuana y los dirigentes de esa provincia cusqueña, Herbert Huamán y Sergio Huamán Hilario: tras cinco años de juicio y luego de ser absueltos en julio de 2017, las marchas y contramarchas de nuestro sistema judicial provocaron que todo el proceso regrese a fojas cero hace unos meses, extendiendo aún por más tiempo el vía crucis que sufren los defensores ambientales de Espinar.

Esa es la realidad de nuestro sistema de justicia y la manera cómo opera en sus diferentes instancias. Si alguien tenía alguna duda, estos audios son una contundente evidencia de cómo se imparte justicia en nuestro país. Las fuerzas democráticas, incluidos los defensores y defensoras ambientales, tienen la tarea de recuperar las instituciones del Estado, hoy en día capturadas por la corrupción.

Escándalo judicial en Perú: Dialogo con Jorge Bracamonte, vocero de la Coordinadora Nacional de DDHH

Javier Tolcachier (Extracto)

En los últimos días en Perú ha explotado un escándalo que compromete al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Corte Suprema de Justicia y la Corte Superior del Callao. La trama, que comprende reparto de cuotas de poder, tráfico de influencias y otros hechos de corrupción, ha devenido en una grave crisis del Sistema de Justicia del país, afectando el sistema institucional y por supuesto a la ciudadanía.

Según la información proporcionada por IDL-Reporteros, los tratos ilícitos fueron perpetrados por algunos de los más altos miembros del sistema peruano de justicia para beneficiarse a través de una impresionante colección de faltas y delitos que van desde el tráfico de favores, las trampas en exámenes de jueces y fiscales, el conflicto de intereses, hasta la manipulación de sentencias en varios casos judiciales sobre crimen organizado e incluso, en por lo menos un caso de abuso sexual de menores de edad.

Todo esto derivó en indignadas manifestaciones de la ciudadanía que salió masivamente a las calles solicitando la remoción completa del Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual sucedió. También renunció el 19/7 el titular de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez.

La degradación sistémica en la Justicia amenaza con salpicar incluso al presidente Martín Vizcarra, pues su nombre aparece en algunas de las grabaciones telefónicas. Por su parte, éste anunció una reforma integral del sistema de justicia.

Para comprender más la problemática, Regional y Popular - el programa que produce Pressenza en colaboración con Radio La Ranchada - entrevistó a Jorge "Tito" Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de DDHH del Perú. La Coordinadora es una plataforma institucional con estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) que articula a 78 organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos a lo largo de todo el país.



Según las informaciones que tenemos, se ha comprobado en el poder judicial peruano una matriz de tráfico de influencias, intercambio de favores, rebaja u omisión de condenas y otras formas de corrupción de la Justicia. Más allá de los nombres ¿puedes ayudarnos a comprender mejor las modalidades de estos hechos?

En el Perú estamos viviendo la crisis más dramática -comprobada además - del sistema de Justicia que hayamos vivido en los últimos cien años. No hemos tenido una situación semejante, salvo en el momento en el que la dictadura fujimorista cooptó al sistema de justicia en los años 90'. Fuera de este hecho episódico en el contexto de la dictadura, no habíamos sido testigos de la profundidad y densidad de una crisis que ya es de naturaleza estructural.

Hemos visto y estamos asqueados, aquí en el país, de ver cómo una investigación que empieza con un grupo criminal vinculado al narcotráfico que tiene a más de cien víctimas, finalmente nos conduce a sus nexos con todos los operadores de Justicia en la zona del Callao. Luego se sigue avanzando y se van evidenciando las relaciones que hay con algunos operadores políticos vinculados a la mayoría congresal de Fuerza Popular, incluyendo algunos empresarios. Lo que estamos evidenciando es que la Justicia en el Perú está sometida a distintos

poderes criminales y finalmente se vende a quienes tienen más plata o poder y esto es indignante, porque es toda la podredumbre que llega a afectar a quienes son los grupos o poblaciones más débiles. Niños y niñas violentados, violadas sexualmente, mujeres víctimas de actos de homicidio, víctimas del conflicto armado interno que no han alcanzado justicia por estos jueces corruptos que venden la Justicia al mejor postor.

Esto ha despertado la indignación masiva. La semana pasada hemos salido cerca de cincuenta mil personas en la ciudad de Lima - un número importante en relación a nuestras movilizaciones aquí - y en todo el Perú calculamos que medio millón de personas se han movilizad.

Nosotros tenemos claro que ya no basta con parches, con curas o soluciones superficiales sino que tenemos que ir a una solución de fondo, a una reforma de la totalidad del sistema de Justicia, incluyendo al Consejo Nacional de la Magistratura, al Ministerio Público y al Poder Judicial y también tiene que haber una reforma del sistema político electoral.

Lamentablemente en los últimos tiempos estamos muy acostumbrados a recibir este tipo de noticias desde el Perú, casos de corrupción en los distintos poderes, en el Ejecutivo, el Legislativo a los que se suma ahora el Poder Judicial. La reiteración de estas

prácticas en la vida política peruana es evidente. ¿A qué se debe en tu opinión?

Hay un asunto de fondo efectivamente y tiene que ver con el fracaso de la transición democrática, una vez superada la etapa de la dictadura. La transición debió haber consolidado nuestras instituciones y sin embargo, lo que hizo durante casi dos décadas es únicamente implementar un sistema muy dinámico para poder favorecer las inversiones a costa de derechos, a costa de mecanismos de seguridad, incluyendo la seguridad jurídica. Se han arrebatado condiciones de seguridad jurídica para los pueblos indígenas y para la defensa de su territorialidad, entre otras. Entonces lo que hemos tenido, en cerca de diecisiete, dieciocho años, es una vorágine en la que hemos favorecido todo tipo de inversiones frente a la desprotección de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, además de relajar los mecanismos de protección que debe tener el propio Estado. Es en ese contexto en el que Perú y sus instituciones han sido prácticamente asaltadas por los grupos de poder económico tanto legales como ilegales. Eso es lo que ha venido aconteciendo y esa es una situación que ya no da para más. Eso está poniendo en cuestión el sistema de convivencia democrática mismo, eso es lo que nos preocupa, porque hay una amplia desconfianza ciudadana frente a las instituciones, frente a la democracia. Hoy la opinión pública de la mayoría está de acuerdo con la posibilidad de un golpe militar, siempre y cuando este golpe permita combatir la corrupción y la situación de la violencia cotidiana que estamos viviendo. Es el país que más alta aprobación tiene sobre golpe militar en América Latina, alrededor de un 55% según la encuesta Latinobarómetro. Eso tiene que ver con la amplia desconfianza ciudadana respecto a nuestras instituciones y nuestra democracia y eso es muy lamentable. Lo otro es que en ese contexto se ha acrecentado la presencia política de sectores autoritarios y negacionistas. Estos sectores que sobre todo están representados por Fuerza Popular, que además controla el Congreso de la República.

Ley de hidrocarburos promueve crímenes ambientales y violación de derechos

No es secreto que en el Perú las leyes son fabricadas a la medida de las grandes empresas e intereses de lobbies extractivos y que no contemplan los derechos de los pueblos indígenas. El caso de la modificatoria de la ley de hidrocarburos, que muy pronto será llevada a pleno para su discusión y aprobación, no es la excepción.

En primer lugar, tal y como sucede con todas las leyes, la norma no ha sido ni está siendo sujeta a consulta con los pueblos indígenas que visiblemente se verán afectados por los procedimientos que esta norma establece. Ya en febrero de este año, los representantes de las federaciones indígenas de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, afectadas por la actividad petrolera en los lotes 192 y 8, hicieron llegar, mediante oficio, esta observación al presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República sin obtener mayor respuesta a su demanda.

En dicha carta, también señalan los problemas que existen en cuanto a la poca claridad sobre las competencias ambientales para la certificación; facultad que al parecer se le otorgaría a Perupetro. Con ello, se entraría en un conflicto de intereses ya que la misma institución a cargo de promover la inversión en el sector de hidrocarburos (Perupetro) no puede también estar encargada de «levantar la información relativa a los aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales en los lotes a ser promocionados por esta entidad». Esta es una competencia que no va en la línea de la naturaleza de Perupetro y que además ya es responsabilidad del Ministerio del Ambiente. En este sentido, las federaciones de las cuatro cuencas han exigido



do que esta función siga dentro del marco de competencia del MINAM.

Otro aspecto preocupante de la ley es lo que se refiere a la extensión del tiempo del contrato y la posibilidad de adecuación y prórroga del mismo. El proyecto de ley establece que la duración del contrato podrá ser de hasta 40 años, cuando antes era 30, y que además el contrato puede extenderse por solicitud de un periodo de retención de hasta 20 años más. Todo ello en negociación, a puertas cerradas, entre la empresa y Perupetro, sin presencia de los pueblos sobre cuyos territorios se realiza la actividad petrolera, ya que la prórroga del contrato no contempla una consulta. Esto afectaría visiblemente a las comunidades ya que tendrían que soportar las condiciones de un contrato durante 60 años consecutivos sin posibilidad de adecuar sus demandas y ver atendidas sus necesidades, las cuales evidentemente cambian con el tiempo.

Por si fuera poco, el plazo máximo de evaluación para la prórroga será de sólo 60 días, tiempo durante el cual Perupetro determinará (a pesar de no ser el ente competente para ello), mediante el in-

forme de OEFA y OSINERGMIN, si la empresa ha cumplido con sus compromisos de acuerdo a normativas ambientales y de seguridad. El principal problema es que esto no incluye aquello que esté en controversia administrativa o judicial, aspecto que la mayoría de las empresas petroleras tiene con las entidades de fiscalización ambiental.

Este es el caso de Pluspetrol, actual operador del Lote 8, que ha detenido en múltiples oportunidades medidas administrativas e instrumentos de gestión ambiental mediante procesos judiciales al Estado; lo que ha impedido que, hasta ahora, se remedien los sitios impactados, dejando ríos, cochas y bosques contaminados, y a las comunidades expuestas a sustancias tóxicas.

Finalmente, la norma dice que los operadores con contratos anteriores a la norma y que estén a 7 años o menos del término de su plazo contractual, pueden

acceder a la adecuación de contrato y a la prórroga. Este sería precisamente el caso de Pluspetrol en el lote 8, que podría decidir adecuar su contrato y presentar la solicitud de prórroga, sin estar obligado a remediar los sitios contaminados en la zona hasta ese momento.

A decir de las prácticas reiterativas de empresas petroleras de eludir mediante procesos contenciosos sus deberes de remediación y, por tanto, poner trabas a la protección del medio ambiente y la salud; la modificatoria de la ley de hidrocarburos es, en definitiva, un incentivo perverso a estas malas prácticas empresariales y una condena al Estado a fracasar en su labor de salvaguarda de derechos ambientales y sociales.

Las exigencias de los pueblos indígenas amazónicos afectados por la actividad petrolera han sido siempre sobre el respeto a sus derechos básicos: vida, salud, educación y ambiente sano. La población lleva casi medio siglo de soportar atentados contra sus vidas, debido a la contaminación que las empresas petroleras han dejado en sus fuentes de agua y alimentación, sin ningún reparo y sin que las empresas se hayan hecho responsables. La modificatoria de la ley de hidrocarburos no haría más que perpetuar esta situación de abuso hacia los pueblos indígenas, al condenarlos al exterminio, volviendo al estado cómplice de crímenes ambientales y de lesa humanidad.

El dilema de la titulación de tierras en el Perú

Por José Díaz (Servindi)

17 de julio, 2018.- Uno de los problemas más dramáticos que afronta la mayoría de poblaciones indígenas en el Perú es, sin duda alguna, el de la titulación de tierras. Una prueba flagrante es el hecho de que muchas de las demandas de titulación de los pueblos originarios hayan implicado procesos que tardaron hasta 25 años mientras que las concesiones para actividades privadas no toman más de un año.

Esta diferencia quedó en evidencia luego de una investigación realizada por el World Resources Institute (WRI) que cuestionó que los procesos de titulación de tierras por parte de las comunidades indígenas impli-

quen 19 pasos que en la práctica se extienden hasta 28 e involucrando hasta a 12 entidades públicas.

«Nuestra investigación muestra que en Perú el proceso de titulación de tierras indígenas es largo, complicado y costoso. A pesar de importantes avances, el procedimiento sigue estando sobrerregulado y presenta inconsistencias. Debería ser básico contar con mecanismos para manejar los conflictos en el proceso de titulación», declaró Anne Larson, jefa de científicos del Center for International Forestry Research (Cifor).

Cabe recordar que en la actualidad existen 36.3 millones de hectáreas tituladas a nombre de 6 500 comunidades indígenas, mientras que otras 4 mil comunidades se encuentran en proceso. Una de las conclusiones del informe del WRI, titulado «La lucha por los derechos a la tierra: reducir la inequidad entre las comunidades nativas y las empresas», es que se imprima mayor voluntad política en agilizar estos trámites.



Minería ilegal deforestó más de mil hectáreas de bosque de Madre de Dios

Fuente: Inforegión.

Según el reciente reporte de MAAP, la devastación representa 2300 campos de fútbol. Las zonas críticas de la minería son La Pampa y Alto Malinowski.

De enero a junio de este año, la minería ilegal de oro deforestó 1725 hectáreas de bosque en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, ubicada en la región Madre de Dios.

Según el reciente reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Peruana (MAAP), esta devastación representa 2300 campos de fútbol, siendo los puntos más críticos las zonas de La Pampa y Alto Malinowski. Para Matt Finner, investigador de la Amazon Conservation Association

(ACA), las intervenciones realizadas en la zona por las autoridades públicas no han sido suficientes.

«La minería ilegal está avanzando en muchos frentes a través de una gran extensión frente a la reserva de Tambopata (...) Para resolver esta crisis, se requiere un esfuerzo estratégico, de gran escala y con abundantes recursos», manifestó para el diario El Comercio.

Por otro lado, el coordinador responsable del área de asistencia técnica del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente (Minam), Daniel Castillo, aseguró que la tasa de deforestación de este año es una de las más crecientes de los últimos años.



Glencore se expande en Espinar: Nueva “Coroccohuayco” debe respetar DDHH

La Empresa minera Glencore, gigante minero suizo que opera en Perú, va concretando el proceso de expansión de la unidad minera más grande que tiene en nuestro país: Tintaya-Antapaccay vuelve a crecer para incorporar un nuevo tajo abierto y labores subterráneas de explotación de cobre a las que denomina "Integración Coroccohuayco"[1]. La operación se coloca sobre nuevos territorios de comunidades campesinas indígenas de la provincia de Espinar, afectará más fuentes de agua y así, aportará a los varios impactos de sus operaciones vecinas Tintaya y Antapaccay. Estos tres tajos y todos sus componentes (túneles, instalaciones, fajas transportadoras, carreteras, camino de acceso, entre otros) forman así parte de la mega operación Antapaccay-Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco.

El estudio de impacto ambiental de Coroccohuayco presentado por la empresa y evaluado (y acompañado) por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), describe los varios impactos ambientales (sobre el agua superficial, el agua subterránea, los suelos, los bofedales, etc.) así como los impactos sociales y económicos, comunes para una operación de esta magnitud. Como es costumbre en los estudios ambientales del sector minero en nuestro país, la empresa concluye que todos esos impactos son de poca o muy poca intensidad. El mensaje que se repite una y otra vez para la población local es que no deberían preocuparse por ellos, pues -apelando a una fe ciega que se exige de las comunidades donde se hace gran minería- "está previsto", friamente calculado. Más allá de la calidad del estudio de impacto o de los mecanismos de participación ciudadana (que trataremos en otra ocasión) implementados por Glencore, esta vez es necesario detenernos en un aspecto que llama la atención de los documentos presentados por Glencore para justificar la viabilidad de su nuevo emprendimiento: la omisión a la realidad en donde opera.

Glencore: Coroccohuayco fuera de la realidad

En su EIA para Coroccohuayco, Glencore omite referirse a la difícil realidad local donde ha operado todos estos años y planea expandirse. Es de conocimiento común que la población y comunidades de la provincia de Espinar mantienen una relación altamente tensa (por decir lo menos) con la empresa minera. Esta difícil relación tiene en su record varios conflictos, estallidos y crisis sociales; que han causado la muerte de 3 ciudadanos espinarenses, decenas de heridos y varios otros costos sociales. Estos conflictos han revelado la precaria situación de ejercicio de derechos que caracteriza a las operaciones mineras de Glencore en el sur de Perú. Así Glencore, en su EIA para Coroccohuayco, omite abordar la crítica situación de riesgo y afectación al derecho a la salud de la población de sus áreas de influencia por causa de la exposición a metales pesados[2]. Glencore no menciona las demandas por la afectación del derecho al medio ambiente por contaminación minera de fuentes de agua locales que aún no han sido resueltas por falta de un (tan esperado) estudio de causalidad de calidad y concluyente, que cierre el tema[3]; tampoco aborda la vulneración de los derechos de agua de campesinos locales, por la reducción del volumen disponible del recurso y la dependencia del bombeo de la empresa para reponer los caudales de sus canales. Glencore no habla sobre la afectación a la libertad de



expresión y a la protesta, limitada severamente por el contexto de represión implementado por las fuerzas policiales en convenio con la empresa. Glencore no menciona si es que y cómo se respetará el derecho a la consulta previa, al territorio y a la autonomía de las comunidades indígenas locales[4]; tampoco menciona que quizás a futuro la operación de Coroccohuayco podría causar el desplazamiento involuntario de las comunidades donde se va a asentarse[5]. Por último, Glencore omite hablar sobre el riesgo que significa operar - y producir más impactos- en un contexto como el que acabamos de describir.

En resumen, Glencore omite incluir en su evaluación la situación de los derechos humanos de las personas a las que a afectar con sus operaciones. Hombres y mujeres que también serán responsables, con su trabajo, territorio y recursos, de gran parte del éxito y claro está, alta rentabilidad, de sus operaciones (aunque a veces se nos haga difícil recordarlo).

Glencore está obligado a respetar derechos humanos

A pesar de lo que muchos empresarios y otros afines al sector minero peruano todavía puedan creer, la necesidad de evaluar e implementar medidas específicas para respetar derechos humanos por parte de las empresas no resulta una demanda "exorbitante" (por usar un término común del gremio). En el nuevo escenario de globalización, los compromisos de las empresas como Glencore de respetar los derechos de la gente sobre la que impactan con sus operaciones, deben ir más allá de una simple declaración de voluntades.

Como vemos, entre sus varios compromisos, ampliamente difundidos frente a la comunidad internacional, Glencore afirma actuar conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos que existen, evaluar riesgos e implementar varios otros mecanismos para respetar los derechos de las poblaciones donde opera. No obstante, lejos del marketing internacional, la realidad de la empresa en nuestro país es otra. Con Coroccohuayco a punto de ser aprobada, creemos que es momento de exigir a la empresa ir más allá de los marcos legales nacionales; marcos que resultan débiles frente al poder político y económico que una empresa transnacional, de la magnitud de Glencore, puede ejercer en un país con una democracia tan debilitada como la nuestra. Así, mecanismos desde el marco internacional como la necesidad de llevar a cabo un proceso debida diligencia en derechos humanos[6] resultan urgentes para Glencore en Espinar. El marco previsto por los Principios Rectores de Empresas y Derechos humanos debe guiar las operaciones de Glencore en Espinar, siguiendo lo estipulado por empresa en su propio Código de Conducta.

Por lo pronto, y esto debe llamar la atención de la empresa (y por qué no, de sus inversionistas, organizaciones de la zona ya han levantado su voz de protesta frente a Coroccohuayco. Ayer martes, fecha en la que se celebró una audiencia de un proceso judicial vigente por la omisión de consulta del proyecto Antapaccay de Glencore, las comunidades afectadas y sus organizaciones se movilizaron en relación a Coroccohuayco. Junto con ellos, exigimos a la empresa a que vaya más allá de sus expectativas económicas y tome en serio su responsabilidad de respetar los derechos de las personas en cuyos territorios piensa operar.

[1] Coroccohuayco se asentará sobre territorios de tres comunidades: Huiñi Coroccohuayco, Pacopata y Huano Huano, cuyas tierras comprará durante la etapa de construcción. Además el área de Influencia social directa de la MEIA incluye otras diez comunidades (Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huaraca, Cala Cala, Huaraca, Huisa Ccollana, Huisa, Anta Ccollana y cc. Suero y Cama. MEIA Antapaccay Expansión Tintaya - Integración Coroccohuayco. Junio 2018. N° de Informe: 164-415-2145.

[2] En su Línea Base aparece únicamente como una referencia a un estudio de salud, entre otros disponibles en el área de operaciones. Lejos de abordarlo en las medidas en su plan de Gestión Social (donde trata salud, educación, alfabetización de manera general), de Manejo Ambiental u otros planes; Glencore opta por omitir este indicador.

[3] Se refiere únicamente a los estudios de la Mesa de Diálogo de Espinar- Monitoreo Participativo del 2013. Señala que este determina la causa geológica de la contaminación del agua, pero omite referirse a los estudios de causalidad pendientes para determinar la responsabilidad sobre fuentes contaminadas específicas.

[4] En la única página del tomo 9. "Otras consideraciones", la empresa hace referencia a la existencia de comunidades indígenas en la zona de operaciones, limitándose al marco legal peruano vigente. No se tiene conocimiento si es que se promoverá el respeto al derecho a la consulta previa en la zona.

[5] Coroccohuayco implica remover el local comunal, escuela e iglesia de la comunidad. También implica la construcción de caminos mineros que cortan el tránsito usual y de pastoreo de la comunidad. Además implica el desvío de canales de riego de usuarios comunales. En suma, el cambio de la configuración de la vida comunal que podría llevar a su final desplazamiento.

[6] La debida diligencia en derechos humanos consiste un proceso que deben seguir las empresas para identificar los impactos reales y potenciales en los derechos humanos que se pueden producir al iniciar sus operaciones y la adopción de medidas para prevenirlos; yendo más allá de los marcos legales nacionales. El mecanismo de exigir una debida diligencia en derechos humanos a las empresas va cobrando fuerza en la comunidad internacional. Actualmente en Suiza, donde opera la casa matriz de Glencore, se debate una propuesta para establecer la obligación de las empresas suizas que operan a nivel transnacional de llevar a cabo un proceso de debida diligencia para sus operaciones.

Comunidades de Espinar protestan

Más de dos mil ciudadanos se movilizaron esta mañana en la provincia de Espinar (Cusco) en relación al proyecto minero Coroccohuayco. Los comuneros y comuneras de 13 comunidades campesinas protestan porque habrían sido excluidos del área de influencia del proyecto en los estudios ambientales presentados por la empresa minera Glencore. Según los manifestantes, al no haber sido consideradas, están excluidas del proceso de participación ciudadana y no pueden hacer oír su voz respecto de los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto Juan Pino, presidente del Frente de Defensa de Alto Pichigua, explicó a este Observatorio de Conflictos Mineros que su demanda es que estas comunidades sean incluidas en el área de influencia y sean consultadas. «Queremos saber cuáles son los daños que nos puede causar. Nosotros vivimos de los ríos de esta cuenca, y definitivamente puede afectar

nuestras aguas», señaló. «Ya hemos visto que con la expansión de Antapaccay, nuestros ojos de agua, nuestros manantiales se están secando y nuestros productos que trabajamos en el campo ya no dan igual que antes», aseguró el dirigente.

Los dirigentes comunales han indicado que esta es una movilización preventiva. Al finalizar la movilización, los comuneros elaboraron un Memorial y ahora buscarán diálogo con la empresa minera para que responda sobre su plataforma.

La llamada «integración Coroccohuayco» sería una nueva ampliación de lo que fuera anteriormente la ex mina Tintaya, que ya fue ampliada con el tajo Antapaccay, actualmente en operaciones. El proyecto aún se encuentra en etapa de observaciones en el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental).

Esta denominada «integración» viene generando dudas en la población local. La empresa ya opera en la zona los tajos Tintaya y Antapaccay, y aspira ampliar sus operaciones con este nuevo tajo Coroccohuayco, pero sin elaborar un Estudio de Impacto Ambiental independiente, pues señala que sólo se «integrará» y utilizará la infraestructura que ya existe en Antapaccay.



Perú. Entrevista al candidato a la alcaldía de Lima por el Frente Amplio

Pepe Mejía.

Viene desde las profundidades, des de los arrabales de Lima, con el propósito de arrasar con la corrupción y los corruptos, y para desarrollar un proyecto inédito: una Lima de y para los y las limeñas.

Histórico trabajador y dirigente sindical en la General Motors. En 1968 militó en el Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) que mítico dirigente campesino, Hugo Blanco. En 1975 fue encarcelado por advertir de que se preparaba un golpe de Estado contra el general Juan Velasco Alvarado. Participó activamente en la organización de la histórica huelga general, del 19 de julio de 1977, que obligó a la dictadura convocar a una Asamblea Constituyente. Desde el Frente Obrero Campesino y Estudiantes del Perú (FOCEP) consiguió –en las elecciones a la Asamblea Constituyente del 18 de junio de 1978– el 12% de los votos. Desde hace 13 años dirige el periódico Lucha Indígena. Corrupción, inseguridad, medioambiente son algunos de los problemas que tendrá que afrontar si gana la alcaldía de Lima.

Pregunta.- Usted ha ganado las primarias del Frente Amplio (FA) y será el candidato del FA a la alcaldía de Lima en las próximas elecciones. ¿Por qué cree que ha sido Usted elegido?

Respuesta.- Creo que mi “triunfo” se lo debo fundamentalmente a dos debates internos que organizó la militancia del Frente Amplio de Lima, en los que pude explicar mis propuestas políticas, muy diferenciadas de mi ocasional “rival” y a una trayectoria de 58 años de militancia bajo las banderas del socialismo revolucionario. También ayudó el haber sido dirigente obrero metalúrgico en la época más importante del sindicalismo clasista. El auditorio era muy joven, pero muy formado en las confrontaciones sociales que sacuden el país.

P.- ¿Cuáles son sus propuestas-base programáticas para ganar la Alcaldía de Lima?

R.- Mis propuestas giran sobre los problemas centrales que preocupan a la población de Lima: seguridad, corrupción, transporte, medio ambiente. Cosas que todos los candidatos dicen, pero nosotros lo enfocamos desde los y las empobrecidos y trabajados. Además, quiero dar un vuelco de 180 grados. Queremos hacer realidad eso que se dice que el pueblo manda y el representante ejecuta. Siempre de abajo para arriba. Nada se hará sin la consulta a los comprometidos en cualquier medida que haya que tomar.

P.- Lima es una urbe muy grande y con muchas desigualdades según donde se viva o se trabaje. ¿Cómo tratará a las grandes empresas constructoras?

R.- Lima tiene 10 millones de habitantes, es una ciudad de todas las sangres, como seguro diría nuestro amauta José María Arguedas, y opino que también de todas las desigualdades. La emigración del interior, traslada hacia la urbe todas sus costumbres ancestrales, desde su danzas, sus relaciones comunales etc. Pero no encuentran reciprocidad en las autoridades que creen que el problema de identificación con ellas, es solo bailar un waino en una festividad. Nuestra política es precisamente aprovechar, entre otras cosas, las potencialidades provincianas, para encarar los problemas de la Lima de hoy.

Las grandes empresas invierten en financiar la campaña de los candidatos, estos una vez elegidos pagan los favores. Lo que determina la ejecución de una obra es la coima, y no



**Enrique Fernández Chacón
Candidato a la alcaldía de
Lima del Frente Amplio**

si la obra sirve para solucionar un problema. Se ha hecho una cantidad de obras que acaban costando 3 o 4 veces más de lo programado. Se han instalado garitas de cobro de peaje en zonas urbanas. Por ejemplo, para trasladarse de Ancón a Lurín, separados por 80 kilómetros, hay que realizar 4 pagos de peaje. Los “bondadosos” alcaldes de derecha en Lima han entregado la concesión de peajes por 30 años, a la mafiosa Odebrecht, y el de la izquierdista Susana Villarán, entre otros favores, se los extendió por 40 años.

P.- ¿Tiene alguna propuesta para incentivar el pequeño comercio o el mercado informal?

R.- No me gusta la informalidad, porque genera inseguridad. Me disgusta que se prive el derecho a ganarse la vida, en un país donde escasea o reina el empleo precario. Defenderé el derecho a trabajar del ambulante, que son un millón en Lima, del conductor de moto-taxi, que son 250 mil, de los incontables colectiveros entre otros sectores. Entonces normaremos concordando las mismas con las organizaciones reconocidas y conformadas por ellos mismos.

P.- Lima, como toda gran ciudad, tendrá un alto nivel de endeudamiento. ¿Qué hará con la deuda? ¿Tiene previsto impulsar una auditoría ciudadana?

R.- Impulsaré una auditoría económica en el que cuadren bien los números. Ahora bien, le adelanto, todo acuerdo de préstamos o compromiso financiero que se hayan concebido con elementos de corrupción, serán sancionadas con distintas medidas de acuerdo a su gravedad. Sanciones que podrían ir desde denuncias a los tribunales a desconocimiento o anulación de los compromisos. Soy partidario de auditorías contables, sociales y morales.

P.- Usted viene desde abajo, vinculado históricamente a las organizaciones populares y sociales, además de sindicales. ¿Tiene alguna propuesta o cómo van a ser las relaciones desde la Alcaldía con las organizaciones vecinales, comunales, sociales y sindicales?

R.- Sé, que todo alcalde que se va le deja una bomba de tiempo al que llega. Sé, que el municipio tiene millonarias deudas con los trabajadores, ex trabajadores y pensionistas, con sentencias judiciales ya admitidas. Si como dirigente sindical me tocó luchar por reivindicaciones para los trabajadores, como alcalde tengo la obligación moral de respetarlas, los trabajadores municipales me conocen, he luchado con ellos, he ganado reivindicaciones con ellos, saben que no hago demagogia electoral cuando afirmo, que, aunque sea el alcalde de todos y todas

las limeñas, los privilegiados de mi gestión, serán los y las trabajadoras y la gente empobrecida de Lima.

P.- La corrupción está muy presente dentro de las instituciones públicas peruanas. ¿Qué medidas tomará desde la Municipalidad de Lima?

R.- Tengo la certeza que el poder descontrolado engendra la corrupción y que esta se enquista en las instituciones públicas. La clave está en hacer lo contrario. Yo no voy a robar un centavo, no lo he hecho de joven y ni se me ocurre hacerlo de viejo, ni me voy a prestar a coimas o al clásico dame que te doy, ni voy a poner a amigos o familiares. Voy a generar el control total de los ciudadanos sobre todas las actividades económicas y administrativas municipales. Buscaré un lema que sintetice, “esta obra se hace con la plata que aportas, que no te roben, organízalos para fiscalizarla”. Al poder de la corrupción le opondré el control de los usuarios.

P.- ¿Cuáles son los principales problemas que afronta Lima?

R.- Yo plantearía a la inversa, ¿qué problema no tiene Lima? Nada funciona bien y parece que todo lo que se gasta en buscar soluciones tiene el efecto contrario. Problemas de transporte, problemas de seguridad, problemas en la administración de justicia y pésima educación, la degradación de la educación universitaria, la salud, desempleo, vivienda precaria, corrupción, insostenibles déficit de ambientales, etc. De todos estos males, los que corresponda al gobierno municipal serán atendidos. Los que correspondan al gobierno central, será un firme aliado del pueblo para exigir que se atiendan a sus demandas.

P.- ¿Qué tipo de campaña electoral municipal hará?

R.- En el Perú hay una crisis de las instituciones que sostienen el régimen imperante, incluidos los partidos políticos, que se han convertido en asociaciones para delinquir. Tienes los partidos vientres de alquiler, o de alquiler de políticos, candidatos enjuiciados o comprometidos en actos de corrupción, hay un ex general que está siendo juzgado por asesinato, hay un partido que se reclama de izquierda pero lleva a uno de derecha. El alcalde de Lima en funciones, hace postular al hijo para asegurarse no ser investigado por corrupto. En otros casos, como no hay reelección del alcalde, postulan a funcionarios o regidores de su entorno en 4 o 5 con el mismo propósito.

Todo esto hace con justa razón, que a la gente que tocas en la campaña, lo primero que te pregunta es si vas a robar como los

otros o vas a hacer lo contrario a lo que prometes. Nosotros no podemos competir, ni nos interesa hacerlo en una guerra de carteles, que son el mejor testimonio de los grupos de poder económico que están tras esas candidaturas. Nosotros usamos las redes, la conversa directa con la gente, con los grupos que tiene relación directa con el municipio, para explicarles nuestras propuestas no cerradas para enriquecerla con los aportes que recogemos que son de una sabiduría impresionante.

P.- Usted es consciente de que todas las fuerzas y poderes económicos de la derecha se opondrán a su elección. Las grandes familias que controlan económicamente al país, los intereses de grandes potencias como China, Estados Unidos, la misma Unión Europea o capitales como los brasileños, chilenos entre otros también tendrán sus preferencias y Usted no será su candidato. Nos puede explicar ¿cómo va a revertir estas presiones para conseguir ser elegido Alcalde de Lima? ¿Qué apoyos tiene o quiere impulsar?

R.- Cuando los que realmente nos identificamos con el cambio social, vamos a una contienda electoral, lo hacemos a sabiendas de las presiones que vamos a tener. Nosotros, no tenemos, ni queremos tener la mínima relación con las grandes empresas o transnacionales en relación a compromisos electorales, y si una vez electos, obligados por las circunstancias de la realización de una obra tenemos que hacerlo, no será de otra manera, que no sea de total transparencia, sin coimas de por medio, ni ayudas amarradas, ni condicionadas a nada. Queremos dignificar la política, poniéndola al servicio del buen vivir de trabajadores y empobrecidos. No somos la izquierda que la derecha necesita. Queremos ser la izquierda que el pueblo necesita, un Frente Amplio, cuya amplitud las limitará los intereses del país, de sus trabajadores y de sus pobres. Nuestro proyecto transformador trasciende los procesos electorales

Los sectores sociales son clave para fortalecer nuestra candidatura y la construcción del Frente Amplio como un instrumento de cambio. En lo técnico tenemos un equipo de campaña dinamizada por los jóvenes. En apoyo profesional, nos apoyamos en los jóvenes profesionales casi recién egresados. Los costos de la campaña, que son exigüos, los financiamos con actividades en las que nos involucramos todos.

Lo fuerte de nuestra campaña es la relación directa con los movimientos sociales. El aprovechamiento al máximo de las redes sociales. Hasta el momento los “grandes” canales de TV o los diarios están cerrados para nosotros. Sin embargo la relación con los pobladores y los dirigentes sociales es distinta, muchos aunque no son Frente Amplio, se están comprando el pleito.

P.- Por último, en caso gane las próximas elecciones municipales ¿impulsará algún proyecto de hermanamiento con otras municipalidades de Perú y del extranjero – particularmente en España y Europa – para hacer frente a los intereses del capital? ¿Abogará por impulsar una red de ciudades del buen vivir basada en la cooperación técnica y la solidaridad?

R.- Sí, con toda nuestra fuerza, Lima no es el todo, es parte del Perú, como Perú, lo es del mundo. No hay autarquía en la forma de ver la vida en nuestro proyecto político, todos nos necesitamos, sin sometimientos de nadie por nadie y menos cuando la propia realidad del mundo actual nos demuestra la necesidad de unir esfuerzo contra el enemigo común que nos niega a la felicidad que debería ser la razón de vivir.

Gobierno de Israel continúa matando palestinos

Como mi segunda entrega para Lucha Indígena, compartiré un poco de mi experiencia en Palestina como parte de una delegación internacional que visitamos aquel país el año pasado.

En esta ocasión hablaré de la organización anfitriona y de su labor en la defensa de presos en Palestina.

ADDAMEER es una organización no gubernamental establecida en la ciudad de Ramala y su labor va desde la documentación, el trabajo con las familias de los presos, la asesoría hasta por supuesto, la defensa de los mismos ante las cortes militares israelíes que es donde se juzga a los niños, hombres, mujeres y ancianos que son detenidos por Israel acusados de actividades en contra de su estado.

Esta organización palestina, en cuyo equipo trabajan jóvenes, ex presos, un equipo multidisciplinario y por supuesto un muy experimentado equipo de abogados se enfrenta cotidianamente a la ardua y a pocas veces frustrante tarea de trabajar en pro de aquellos palestinos que son arrestados, (decir secuestrados no sería exagerado) sistemáticamente de madrugada, bajo el mismo esquema que Israel aplica como una medida pensada en menguar no solamente a la población palestina sino a su espíritu. Porque si de algo se ha encargado el sistema judicial militar de ocupación es de demostrar que las leyes son un engranaje más en la maquinaria de exterminio, despojo y colonización.

Addameer ha documentado que a la fecha hay un total de 6119 presos palestinos, de



ellos 330 son niños, 59 son mujeres, de todos ellos 479 cuentan con penas que superan los 20 años de cárcel y 525 han sido condenados a cadena perpetua. Lanzar piedras a vehículos blindados, hacer publicaciones en Facebook en contra de la ocupación, ser señalados por los colonos judíos de falsos crímenes o defenderse de ataques de esos mismo colonos son algunos de los motivos para ser detenido, como lo señala la misma organización en sus informes, un gran porcentaje de esas detenciones ocurren en la madrugada, entre las 3 y las 4:30 am comandos militares fuertemente armados y en vehículos blindados rompen puertas y ventanas, entran gritando como jauría a las viviendas, apuntan sus armas y sus odios a los moradores y sacan de la cama a

quien secuestrarán en ese operativo; la orden la liberó un juez militar, basado en testimonios de testigos protegidos, que nunca o casi nunca se van a carear con el preso, aplicando la ley que tienen en sus manos para tales casos y que les da libertad de mantener en aislamiento a los detenidos por largos periodos, la libertad de torturar, la libertad de ocultar o simplemente no decir de que se le acusa, la libertad de recurrir al absurdo hecho ley que se llama detención administrativa y que permite retener a alguien por largos periodos que pueden sucederse uno tras otro sin fincarle delito alguno para justificar su encierro, su incomunicación con sus familiares no importando que se sea solo un niño.

En las cortes militares, los abogados de

Addameer defienden a los detenidos en un medio que los tiene acotados, buscando resquicios de razón en la sin razón de esas leyes; en el mundo del absurdo el acusado es apercibido de que no puede entablar contacto físico, visual y menos aún hablar con sus familiares ahí presentes quienes luego de haber viajado por muchas horas, de haber pasado humillaciones en los check's point's y en los centros de detención, de horas al sol o la lluvia y el frío esperando a ser llamados si es que no se pospasa la audiencia, por fin vuelven a ver a su familiar desde aquella fatídica noche en que fue arrebatado hace meses, semanas o en el mejor de los casos días atrás.

Solo un abogado o una abogada con una gran humanidad y alta calidad moral se apersonan diariamente en los juzgados militares para defender legalmente a quienes han caído en la espiral de la justicia militar israelí y muchos de esos abogados más sus equipos que acompañan a sus familias en tan indignante proceso se encuentran hoy en la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Presos y es de suma importancia resaltar el trabajo de asociaciones como esta que trabajan intensamente en territorio palestino no solo realizando su cometido sino también hermanando luchas y rebeldías de organizaciones e individuos para con el pueblo palestino y las organizaciones que trabajan con él.

Ricardo Garza
México

Argentina Masivas manifestaciones contra el FMI

Diferentes organizaciones sociales, gremiales y políticas manifestaron su repudio a la llegada de la directora del Fondo Monetario, Christine Lagarde, quien esta noche cenará con el presidente Mauricio Macri. Además recordaron que la nueva deuda contraída por el país con el organismo es "odiosa y execrable".

Numerosas manifestantes, en su mayoría de agrupaciones de izquierda, se concentraron frente al Ministerio de Desarrollo Social para plantear sus reclamos y rechazar el acuerdo con el FMI.

En tanto, las organizaciones sociales que integran la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) realizarán esta tarde un acto frente al Banco Central, en rechazo al stand by acordado con el Fondo, cuyo primer desembolso (15.000 millones de dólares) se está liquidando a razón de 100 o más millones de dólares diarios a través de la subasta que realiza el propio BC.

Allí, se hará entrega del texto completo de la carta enviada a Lagarde hace cuatro días, firmada por todas las corrientes gremiales, incluidas la CGT y las CTA, los movimientos sociales y la mayoría de la oposición, que no reconocen la legitimidad del acuerdo y consideran la nueva deuda como "odiosa o execrable".

Los firmantes de la misiva, además, le advierten al Directorio del organismo multilateral acerca de "la explosiva situación social que vive la Argentina y que seguramente se agravará a medida que se apliquen las medidas pactadas".

Mañana, en tanto, militantes de diferentes organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizarán a la sede de la reunión del G20 para repudiar, una vez más, el acuerdo entre el Gobierno y el FMI.

Los manifestantes se concentrarán a las 12 en la intersección de Las Heras y Pueyrredón para luego marchar al Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizará el encuentro de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales de los países miembros del grupo.

Acuerdo Argentina-FMI: La "entrega de la soberanía y la destrucción" de un país

Resumen Latinoamericano / 20 de julio de 2018 / Sputnik

Más de 10.000 personas firmaron una petición en línea dirigida a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, para manifestar su oposición al acuerdo alcanzado con el organismo multilateral de crédito, por considerar que atenta contra los intereses del país.

Lagarde se encuentra en Argentina con motivo de la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20. Ante la presencia de la jefarca del FMI, diversos movimientos sociales convocaron a una concentración este viernes en el Obelisco de Buenos Aires, con una marcha hacia las inmediaciones del Banco Central.

Allí, se realizará un "acto público y masivo" en el que se leerá la carta, que cuenta con el apoyo de distintos referentes del arco político opositor, de la sociedad civil organizada y del movimiento sindical, explicó a Sputnik Juan Martín Carpenco, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), una de las organizaciones convocantes.

"Creemos que ha entregado al FMI el manejo del Gobierno y de las decisiones fundamentales de Argentina. (...) Necesitamos que Lagarde escuche que hay una posición y un número importante de argentinos que

no está de acuerdo con lo que está haciendo el Gobierno", dijo Carpenco.

Al alto endeudamiento externo —"un elemento históricamente muy dañino para el futuro y la soberanía"— se le suman cifras enormes de obligaciones internas emitidas a través de letras del Banco Central cercanas al billón de pesos (alrededor de 36.000 millones de dólares).

Según el portavoz de la CTEP, a la Administración de Mauricio Macri "se le ha descontrolado totalmente la política económica" y ha entrado en una "pendiente descendiente", con una previsión de ajuste de 300.000 millones de pesos para 2019 (11.000 millones de dólares).

A criterio de los manifestantes, además del préstamo stand-by por 50.000 millones de dólares concedido por el FMI, el país seguirá pidiendo créditos, situación que lo empujará hacia una situación aún más delicada que solo beneficiará a los "pools sojeros y a la banca privada".

"La carta fue redactada en parte por abogados. Hay un título en derecho internacional que habla de deuda odiosa y execrable, cuando el Gobierno de un país toma deuda que atenta contra los intereses nacionales. Por lo tanto es posible que si se reclama esta deuda se reconozca como ilegítima", precisó Carpenco.

realizará otra a las 12.00 (16.00 GMT) del sábado 21, en las inmediaciones de las avenidas Pueyrredón y Las Heras de Buenos Aires. Según Carpenco, se espera que la afluencia sea masiva a pesar del "bloqueo mediático" que a su criterio existe en el país para aquellas voces que desafían las medidas del oficialismo.

Asimismo subrayó el carácter pacífico de las manifestaciones, ante la posibilidad de represión por parte de las fuerzas federales. La finalidad es "mostrar que hay una multitud de ciudadanos conscientes" en contra de "la reconfiguración política, económica y social de un país para el mediano y largo plazo" que implica el acuerdo.

El líder social también consideró que "esta entrega de la soberanía" se traduce en "una destrucción" para el pueblo, que provocará "más villas y asentamientos, que los niveles de violencia se incrementen y que se deteriore la salud y la educación".

La vuelta de Argentina al FMI recuerda a muchos el estallido social de 2001, cuando tras una década de aplicación a rajatabla de las recetas del organismo, el país vivió una de sus peores crisis económicas. Para el integrante de la CTEP, actualmente preocupa "la velocidad" con la que se está llegando a un panorama similar.

"Solo con caminar un poco por las calles de la ciudad de Buenos Aires, uno ve la cantidad de gente durmiendo en la calle. Familias que se nota que hace poco tenían vivienda porque están con muebles, cuadros o sillones en la calle", describió.

"Nuestros comedores comunitarios habitualmente eran un simple refuerzo para unidades productivas, como cooperativas de cartoneros que después de trabajar toda una jornada, a la noche comían todos juntos. Hoy en día esto no es así, la gente se acerca a los comedores con hambre", concluyó.



Entre los firmantes de la misiva, están el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, además de referentes como Estela de Carlotto (de Abuelas de Plaza de Mayo) y Taty Almeida (de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora). Además de la manifestación del viernes, se

Sin auspiciantes ni prensa servil las caravanas llegadas desde todos los puntos cardinales de América Latina dieron vida y nervio al II Foro Latinoamericano de La Poderosa, en una cumbre de base de las potencias plebeyas que se niegan a ser silenciadas. Rostros de la iconografía revolucionaria junto al de las víctimas de la represión estatal; cantos que interpelan la realidad argentina y latinoamericana; niños, adolescentes, jóvenes y adultos provenientes de 96 barriadas de doce países de la región enfundados en sus buzos y remeras rojas con su marca de identidad: «La Poderosa».

Pasen y escuchen el grito gutural de la identidad villera que confluyó en Porto Alegre entre el 27 y 29 de julio en el 2º Foro Latinoamericano-Cumbre de Base de La Poderosa que sesionó en nombre de la activista favelera asesinada Marielle Franco, del expresidente Lula da Silva y de todos los caídos en las garras de la represión uniformada. Aullido, expresión visceral, voz que interpela. Es la Poderosa, que se inspiró en la moto Norton 500 en la que en 1952 se subió Ernesto Guevara, antes de ser el Che, y su amigo Alberto Granado para recorrer la América que no sale en las tarjetas postales. Y de ese zahorí nació hace 14 años este poder gutural de las villas de Buenos Aires, para golpear el pecho y decir que ser villero no es un estigma, que ser villero es cultura, identidad, orgullo.

Primero fue en Zavaleta, y de allí irradió su impronta a Fátima, a la Villa 31, a la 20-21, a la 1-11-14 y siguió abriendo senderos de sur a norte de la Argentina. Atravesó fronteras, esas delimitaciones que este movimiento quiere romper, porque su artificialidad separa y enfrenta pueblos, llegando a Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México y Cuba

Micros arribados de todas direcciones atronaron en el sur de Brasil. Una euforia orgullosa bramó en la Casa Gaucha de Porto Alegre, grito latinoamericano-indio-caribeño que crece desde abajo exigiendo su derecho de identidad.

«Aunque nos caguen a palos, nunca nos van a callar», atronaba la barriada aguardando el inicio de un hecho cultural histórico para el movimiento villero-favelero.

Nacho Levy es el referente de La Garganta Poderosa. Flaco, alto, oriundo de Zavaleta, transmite en su mirada, andar y verbo su convicción inquebrantable. Lleva puesta una remera roja con la leyenda en portugués «Lula, vale la lucha». Y esa consigna, junto al homenaje a los mártires de las luchas populares como Santiago Maldonado, Marielle Franco, Luciano Arruga, los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Kevin, Kiki, Nazareno, Agustín y los miles de pibes asesinados por las fuerzas de seguridad se hicieron bandera.

Brasil no fue casual: el proceso espurio contra dos expresidentes populares, uno encarcelado arbitrariamente para que no sea candidato, Lula Da Silva; y Dilma Rousseff, cobardemente quitada de su legítimo cargo constitucional mediante un golpe parlamentario. Por eso la elección del lugar fue política e ideológica, clasista.

Luche, que se escuche. El poder popular bramó en Porto Alegre



Lula está castigado por abrimos la escuela / Lula está secuestrado, cuenten otra novela / Somos todos villeros, / de una misma favela / somos negros torneros, de la verdeamarela.

Bueno.

Habla Nacho.

Se espera su palabra, la cual dará inicio a este hecho histórico para esta organización villera, su primero encuentro transfronterizo. Camina, se sienta, mira a los ojos, se para nuevamente. Es un orador inusual para estos tiempos, su convicción late, su voz conmueve, su discurso tiene fondo y forma. Es el grito de la villa. Y arranca duro. Tomando lista. Pero no del tipo escolar tradicional. Nombra a los que murieron por la vida: «Santiago Maldonado, Marielle Franco, Rodolfo Walsh, Berta Cáceres, los 43 de Ayotzinapa, las víctimas del Plan Cóndor, de las dictaduras; brujas, negros, villeros, faveleras, insurrectas, feministas, maestros villeros, hijos e hijas de Paulo Freire, ni una menos, comunidades ancestrales ¿están?» Y la respuesta atronadora: «¡Sí, están!».

Vamos, saltando precipicios, somos sobrevivientes de (Michel) Temer y Mauricio (Macri).

«Legamos desde 12 países de América Latina, 96 asambleas barriales y no hay un solo cartel de auspiciantes porque estamos hinchados las pelotas de los voceros que nos quieren explicar. Este foro construye desde abajo para reconocernos como humanos, para descender el manto que nos invisibiliza», explica Nacho sobre esa Garganta Poderosa que «nacío para demostrar que podemos dejar de ser un barrio silenciado». ¿Dónde estás democracia? / Todavía te estamos esperando / esto ya no tiene gracia, / ¡mirá quién nos está gobernando!

do!

«Trabajemos para que este foro sea un espacio para darnos cuenta del poder que tenemos en nuestras manos. Solo no se salva nadie, nuestros barrios no se salvan solos», arengó Levy. «Somos 12 países pensando por qué y para qué llegamos hasta acá. Esto es el inicio. Hay que trabajar mucho estos tres días para que este no sólo sea un evento, una anécdota, sino que sirva para darnos cuenta del poder que tenemos en nuestras manos desde siempre»

Cómo grita la Garganta / cuando callan la verdad / no lo que creemos una mierda / a la prensa amarilla.

Tras la palabra de Nacho Levy tomaron la posta referentes sociales de la región: Pedro Kumamoto, político mexicano independiente; Shirley Medina, de La Poderosa Uruguay; Pablo Capilé, de Midia Ninja; Claudia Albornoz, de La Poderosa Santa Fe; y Keyla Estévez García, de La Poderosa Cuba.

Esa primera jornada culminó con una marcha por Marielle Franco, quien ese 27 de julio hubiera cumplido 39 años. Concejala del PSOL, activista feminista, del colectivo LGTB y favelera. Mónica, su compañera de vida, encabezaba la manifestación, a su lado el hermano de Santiago Maldonado, Sergio.

La movilización llegó hasta la rua Duque de Caixas, a las puertas de una casa tomada por mujeres para proteger y ayudar a otras mujeres atacadas por el sistema machista-patriarcal. Porque como cantaba Alf Primera, «los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos».

El Foro contó también con seis espacios de debate: Comunicación de base; Acceso a la tierra; Economía Popular; Feminismo y territorio; Derechos Humanos y fuerzas de seguridad; y Educación para

la emancipación. Quiénes somos, adónde vamos, qué decidimos, qué interpelamos. Que gritan nuestras remeras, nuestras conciencias, nuestros tatuajes. Que la memoria es Poderosa y el futuro es nuestro. Porque los cielos se toman por asalto y no pidiendo permiso. La jornada culminó con un panel de Organización Popular en el que tomaron la palabra Juan Graboís, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de la Argentina (CTEP); y Berta Zúñiga Cáceres, la hija de la dirigente lenca hondureña asesinada Berta Cáceres.

Y porque la Poderosa es sustancia de pueblo, se jugó en el Parque Marinha la copa de fútbol Resistentes de América, en equipos mixtos, sin árbitro y con reglas propias: lealtad y respeto porque el resultado es lo que menos importa.

Fidel Ruiz, con la camiseta de México, parado en el centro de la cancha, camina mientras una ronda lo escucha, es el referente nacional de fútbol popular de la Poderosa. Y explica con elocuencia, mirando a los ojos, por qué el fútbol es una herramienta de transformación, de los de abajo y contra el negocio que se hace con la pelota.

El cierre fue con un panel de integración regional y un acto cultural. Dos candidatos presidenciales brasileños de izquierda: Guilherme Boulos y Manuela D'Ávila; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; y Carol Pruner, una de las juristas que asumió la defensa de Lula da Silva.

Coincidieron en la urgente necesidad de responder a «la convocatoria de La Poderosa para que la unidad popular se logre a desde la base y en la calle».

Pérez Esquivel «agradeció a La Poderosa, a toda esta gente que vino de nuestros países hermanos, y a Nacho Levy por invitar a una reunión en la que, desde el comienzo, se nos viene reclamando la unidad para poder enfrentar al autoritarismo y al golpismo de los gobiernos que hoy prevalecen en la región».

Enfundados en las camisetas de sus selecciones, los 12 referentes de La Poderosa leyeron los acuerdos a los que arribó la Cumbre de Base con el objetivo común de que esta plataforma sirva para hacer un llamado de unidad urgente ante las disputas inmediatas que se ven en nuestros países

«Un programa hecho desde la base. Nuestro proyecto. Nuestra palabra. Nuestra organización. Cómo no vamos a ser hermanos de resistencia con una estrategia común».

Luego, ese racimo de 2.000 almas llegadas a Porto Alegre celebraron ser parte de este sueño, ya era de noche, cantaron hasta quedar afónicos. Fueron tres de días casi sin dormir, sin embargo, antes de subir a los micros rumbos a sus barrios, limpiaron todo el lugar que los cobijó.

Y así. Sin auspiciantes ni prensa servil, con un morral cargado de sueños, La Poderosa rumbo a su tercer foro hacia Montevideo, será en 2019 y las caravanas partirán desde la ESMA, el mayor centro clandestino de detención, tortura y muerte de la dictadura cívico-militar. Memoria. Verdad. Justicia. Esta es una crónica imposible de concluir. No hay manera de encorsetar en este manojito de palabras todo el amor que habita en la potencia plebeya de La Poderosa.



La administración Trump no es el resultado de un fenómeno aislado en Estados Unidos. Donald Trump es el resultado de un proceso largo de descomposición política, cultural y social. Trump es un producto de la democracia fallida existente en Estados Unidos. Mientras la clase dominante trata de perpetuar la ficción de que Estados Unidos es una verdadera democracia y que Trump y las mutaciones políticas alrededor de él son en cierta forma una desviación aberrante que puede ser vencida en la siguiente elección, más avanzará la llamada “democracia representativa” hacia una verdadera tiranía. El problema no es Trump. Es un sistema político, controlado por la capacidad corporativa y las cabezas dirigentes de los dos partidos políticos principales, que en realidad es uno solo, pues ambos defienden los intereses de la clase dominante para los que los intereses generales de la población no tienen mucha importancia. Las discrepancias que podemos observar durante la administración Trump es una manifestación de la defensa de intereses de distintos sectores de la economía que no quieren ser desplazados por otro y defienden el control que han estado ganando durante años. Un caso bien definido está en los sectores que han realizado cuantiosas inversiones en otros países, con el fin de aprovechar la mano de obra barata de estos, los recursos naturales de los mismos y las ventajas fiscales que le proporcionan exenciones de impuesto y la posibilidad de enviar sus utilidades a paraísos fiscales sin tomar en conside-

EE.UU

El colapso se acerca



ración el nivel de afectación que esto produce en cuanto a la economía y el desempleo en los propios Estados Unidos. Revertir esta tendencia como lo está haciendo Trump, implica la retirada de algunos acuerdos internacionales, como el del medio ambiente, para poder proporcionar utilidades a las empresas que controlan las minas de carbón y las que lo transportan, además de disminuir el desempleo en ese sector, lo que siempre promueve el auge económico en otros. Incrementar la producción de automóviles en Estados Unidos es otra tarea que implica el descontento de aquellas empresas que realizaron sus inversiones en el extranjero, principalmente México, con la idea de sustituir un producto fabricado en Estados Unidos por otro que fabricado en el exterior le brinda mayores utilidades a la

empresa. La relación económica alcanzada con algunos “aliados” y otros que no lo son tanto, implica además el traslado de tecnología y también el aumento de la competencia comercial en el mercado mundial por aquellos que recibieron las inversiones y la tecnología estadounidense, que pueden producir más barato y por lo tanto representan una fuerte competencia en el mercado mundial, detrás de lo cual están los intereses económicos de empresas estadounidenses que provocan un aumento del desempleo en su propio país de origen pero tienen el aliciente del incremento de sus utilidades. Todo esto está en contra de lo planteado por Trump “America first”. La guerra comercial afecta a los países que se han apoderado de los mercados tradicionales estadounidenses,

pero también afecta a las propias empresas de Estados Unidos que tenían todas sus esperanzas puestas en las inversiones en terceros países. En el año 2016, la inversión acumulada total de Estados Unidos en otros países, representó 5,33 trillones de dólares, según informe de “El Portal Estadístico”. Los países que han recibido el mayor monto de inversiones del año 2000 al 2016, son Australia, Japón, China, Alemania y la región de Asia Pacífico.

¿Cómo modificar todo esto?

No es fácil cambiar el rumbo de lo que se ha estado construyendo durante años. La filosofía de los grupos que han estado en el poder en Estados Unidos en los últimos años, ha sido el tratar de utilizar la “globalización” como instrumento de sus intereses hegemónicos, que se fundamentan en lograr un acuerdo con las clases dominantes de otros países para sacar el máximo de beneficio económico posible de sus inversiones de capital. El grupo que se encuentra en el poder en estos momentos en Estados Unidos, representado por Trump, no quiere el dominio mediante alianzas, quiere tener las riendas en sus propias manos y que el carruaje se mueva acorde a sus intereses particulares. Tener seguidores, no socios. Una gran potencia con países que se pliegan a la misma y cuyo futuro lo deciden los intereses estadounidenses. El sistema creado durante años debe cambiar lo antes posible, el colapso se acerca.

En la ciudad de Nueva York, más de 10,000 personas marcharon a través del puente Brooklyn protestando contra la administración de inmigración Trump y demandan la reunificación de todos los niños migrantes separados de sus padres durante la administración Trump y su decreto “tolerancia cero”.

De costa a costa, decenas de miles de personas se manifiestan contra las separaciones de familias de inmigrantes en EE.UU.

El sábado, decenas de miles de manifestantes tomaron las calles de todo Estados Unidos en un día nacional de acción, en protesta por la política de represión de “tolerancia cero” llevada a cabo por el presidente Donald Trump contra los inmigrantes. Según activistas, se realizaron hasta 700 manifestaciones en todo el país, incluyendo una en el puente internacional de la frontera entre Estados Unidos y México en El Paso, Texas. Estas son las palabras de Fernando García. Fernando García expresó: “Es en este puente donde muchos solicitantes de asilo fueron rechazados y despojados de protección y de la posibilidad de pedir asilo. Creo que no solo viola las leyes internacionales, sino también las nacionales, el hecho de que haya familias buscando protección y que estos oficiales los rechacen. Obviamente hay una exigencia en común, y es que no podemos tratar a los inmigrantes como criminales, no podemos encarcelarlos y mucho menos podemos encarcelar a los niños, como lo está haciendo Estados Unidos”.

Contra la separación de las familias



Centros de detención participan en la marcha en El Paso en el “Un día sin inmigrantes” (AP). Las manifestaciones se produjeron 24 horas después de que el gobierno de Trump afirmara ante un tribunal que tiene derecho a encarcelar indefinidamente a las familias de inmigrantes, a pesar de un dictamen judicial de 1974 que establece que el gobierno debe liberar a los niños inmigrantes de los centros de detención antes de los 20 días. El sábado, de costa a costa, los manifestantes exigieron el fin de las separaciones y detenciones familiares. Las siguientes son las palabras de la actriz y activista Laverne Cox, hablando en una protesta en Los Ángeles. Laverne Cox expresó: “Estados Unidos, estamos aquí porque creemos que las familias deben estar juntas. Estamos aquí porque tenemos el corazón roto. No olvidemos que este país fue construido a costa de la esclavitud que arrancaba a los niños de sus familias de manera rutinaria”. De costa a costa, decenas de miles de personas se manifiestan contra las separaciones de familias de inmigrantes en EE.UU. El sábado, decenas de miles de manifestantes tomaron las calles de todo Estados Unidos en un día nacional de acción, en protesta por la política de represión de “tolerancia cero” llevada a cabo por el presidente Donald Trump contra los inmigrantes. Según activistas, se realizaron hasta 700 manifestaciones en todo el país, incluyendo una en el puente inter-

nacional de la frontera entre Estados Unidos y México en El Paso, Texas. Estas son las palabras de Fernando García. Fernando García expresó: “Es en este puente donde muchos solicitantes de asilo fueron rechazados y despojados de protección y de la posibilidad de pedir asilo. Creo que no solo viola las leyes internacionales, sino también las nacionales, el hecho de que haya familias buscando protección y que estos oficiales los rechacen. Obviamente hay una exigencia en común, y es que no podemos tratar a los inmigrantes como criminales, no podemos encarcelarlos y mucho menos podemos encarcelar a los niños, como lo está haciendo Estados Unidos”. Las manifestaciones se produjeron 24 horas después de que el gobierno de Trump afirmara ante un tribunal que tiene derecho a encarcelar indefinidamente a las familias de inmigrantes, a pesar de un dictamen judicial de 1974 que establece que el gobierno debe liberar a los niños inmigrantes de los centros de detención antes de los 20 días. El sábado, de costa a costa, los manifestantes exigieron el fin de las separaciones y detenciones familiares. Las siguientes son las palabras de la actriz y activista Laverne Cox, hablando en una protesta en Los Ángeles. Laverne Cox expresó: “Estados Unidos, estamos aquí porque creemos que las familias deben estar juntas. Estamos aquí porque tenemos el corazón roto. No olvidemos que este país fue construido a costa de la esclavitud que arrancaba a los niños de sus familias de manera rutinaria”.

El pueblo mexicano acaba de infligir una derrota electoral histórica al régimen político de las clases gobernantes y dominantes. El PRI ya había sido derrotado antes pero por otra parte de la derecha, el PAN de Fox, y ahora PRI, PAN, PRD y demás cómplices han sido vencidos por la izquierda reformista que logró canalizar el odio de las grandes mayorías. La abstención, por eso, apenas llegó al 37 por ciento y la división en la burguesía respecto a si aceptaban o no un gobierno de López Obrador redujo al mínimo el apoyo a los partidos tradicionales de la derecha y ultraderecha.

El 52,87 de AMLO es el resultado de la intervención de los jóvenes en el terremoto de 1985, de la victoria de Cárdenas en 1988, del levantamiento zapatista en Chiapas en 1994, del repudio al fraude que impuso a Calderón y a Peña Nieto, de la resistencia heroica contra un régimen de asesinatos, atentados contra los derechos y las conquistas y sumisión al imperialismo. El triunfo es de los oprimidos, no de AMLO o MORENA, que fueron el canal transitorio de una voluntad general.

El 71 por ciento de votos por MORENA en Chiapas indica que el zapatismo y todos los pobres votaron allí en masa por AMLO. El 66,27 en Guerrero y el 65,52 en Morelos

PRIMERAS IMPRESIONES EN CALIENTE SOBRE UN TRIUNFO HISTÓRICO



revelan la misma ola social de fondo, expresan un ¡Basta ya! generalizado, un nuevo escalón ascendente en la construcción de una conciencia anticapitalista.

AMLO, como se preveía, está siendo aceptado por los capitalistas como un mal menor, pero su elección será considerada por sus votantes como un triunfo propio, como un acceso no sólo al gobierno sino también

al poder. Por eso quienes votaron por López Obrador pasarán dentro de poco a pedirle, exigirle, medidas concretas contra sus explotadores. AMLO llamó de inmediato a la reconciliación, pero sus votantes piden medidas drásticas e inmediatas contra los asesinatos, los corruptos y ladrones, los dueños de minas, los hambreadores, los que venden el país. López Obrador, como nuevo Mad-

ro, quiere hacerse cargo del Estado así como está, pero quienes lo han hecho presidente luchan en cambio contra ese Estado culpable del crimen de Ayotzinapa y lleno de Huer-tas potenciales.

Hoy es el momento de los brindis y de los festejos y de la suma de todos los oportunistas al carro del vencedor pero ya se acercan los días de los reclamos populares y de las divisiones en MORENA y el gobierno de centroderecha que formará López Obrador para tranquilizar a sus garantes en las fuerzas armadas, en la burguesía y en Washington.

Para garantizar un cambio, para evitar las inevitables reacciones de la gran burguesía apenas AMLO deba hacer alguna concesión a la base popular de su gobierno y para construir poder desde abajo llegó la hora de formar en todo el país comités de acción popular y de unirlos entre sí para formular directamente planes de desarrollo favorables a los trabajadores. Es la hora de apoyar todo lo que sea positivo y de criticar las medidas procapitalistas o insuficientes ayudando a los votantes de AMLO, codo con codo con ellos, a organizarse y sacar sus propias conclusiones.

Guillermo Almeyra

“El pueblo haitiano vive una miseria sin precedentes”

Presna CLATE, 11 julio 2018

Así lo explicó Laurenel Louis, Secretario de Conflicto y miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Trabajadores Públicos y Privados de Haití (CTSP), organización que integra la CLATE. Tras dos días de huelga general y la marcha atrás del Gobierno en su decisión de aumentar los combustibles, Puerto Príncipe y las principales ciudades viven una tensa calma a la espera de nuevos anuncios. El dirigente de la Confederación que nuclea a trabajadores públicos y privados de Haití explicó que la reacción del pueblo haitiano desatada el pasado viernes 6 de julio tras el anuncio del presidente Jovenel Moise de aumentar los combustibles es producto de “el deterioro social que vive todo el pueblo haitiano, ya que aquí los trabajadores no tenemos cobertura ni seguridad social y se vive una miseria sin precedentes. Los alimentos aumentan cada día su precio y el Gobierno, de derecha, no escucha ninguna de las reivindicaciones del pueblo”, indicó Laurenel Louis.

Vale recordar que la reacción popular se inició el viernes pasado cuando el Gobierno haitiano anunció que a partir del día siguiente entrarían en vigor los nuevos precios de los combustibles, que reflejaban incrementos de entre 37 a más de un 50 % en productos como la gasolina y el kerosene, que se usa mayormente para cocinar e iluminar los hogares de ese país.

Finalmente, y ante la creciente protesta en

las calles, las autoridades nacionales dieron marcha atrás con el anuncio, que había sido acordado, entre otros puntos, con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de dicha revocación las protestas dejaron al menos tres fallecidos, heridos y la destrucción y saqueo de decenas de negocios, hoteles y establecimientos comerciales.

Ante estos hechos, los sindicatos haitianos convocaron a una huelga general de 48 horas que se cumplió el lunes 9 y martes 10 de julio. Y se esperan más anuncios de parte de las organizaciones populares.

“La Confederación de Trabajadores del Sector Privado y Público tiene una postura muy clara ante esta crisis: no avalamos al actual Gobierno ni sus políticas de aumentar los productos esenciales de la población. Y exigimos a las autoridades que busquen otras fuentes para financiarse, como cobrar impuestos a las personas que no los pagan o están exentos y terminar con los privilegios de los pocos haitianos que tienen una franquicia aduanera”, agregó Louis.

Además, el dirigente pidió que se investiguen inmediatamente las denuncias por corrupción a distintas autoridades de gobiernos anteriores en el caso de la malversación de fondos de Petrocaribe. “Son 3 mil millones de dólares los que están siendo investigados por casos de corrupción. Sobre eso hay que hablar y pedir que se profundice la investigación”, reconoció el dirigente de la CTSP haitiana.

Renuncia primer ministro de Haití, Jack Guy Lafontant, tras protestas contra medidas de austeridad

16 JUL. 2018

En Haití, el primer ministro Jack Guy Lafontant renunció en medio de una ola de protestas contra las medidas de austeridad provocadas por el plan del Gobierno de aumentar los precios del combustible por orden del Fondo Monetario Internacional. Las siguientes son declaraciones del legislador Abel Descoline, en

respuesta a la renuncia del primer ministro.

Abel Descoline expresó: “Es un primer paso para la revolución pacífica, para una revolución política cuyo fin es derrocar el sistema político de Haití y llevar algunos elementos ante la Justicia por trivializar las leyes y la constitución, lo que impide el buen funcionamiento del país”.

DECLARACIÓN URGENTE POR NICARAGUA

17-22 de julio de 2018

Enviar adhesiones

a:declaracionurgenteponicaragua@gmail.com

Por la presente, como intelectuales, activistas sociales y académicos, queremos manifestar nuestro profundo rechazo frente a la gravísima situación de violencia política estatal y violación de los Derechos Humanos que atraviesa Nicaragua, responsabilidad del actual régimen de Ortega-Murillo, lo cual se ha traducido en unos trescientos muertos en los últimos tres meses.

La indignación, el dolor, el sentido de frustración histórica es doble cuando semejante aberración política es producto de líderes y gobiernos que se dicen de izquierda. ¡Qué puede doler más que la ironía de un líder que se dice revolucionario, emulando las prácticas criminales de aquel dictador contra el que se supo levantar! Y esa indignación se hace más intensa aún cuando este panorama de violencia política estatal es completado con el silencio cómplice de líderes políticos y referentes intelectuales (auto)proclamados de izquierda. La connivencia de cierto establishment intelectual - una izquierda oficialista que suele arrojarse la representación exclusiva de la ‘izquierda’ -, ha mutado al calor del poder gubernamental en un sucedáneo del más desbocado cinismo.

Denunciar esta situación tan dolorosa como inaceptable, alzar la voz contra los atropellos a las más elementales libertades y derechos que el actual gobierno nicaragüense viene realizando, no es sólo un deber de solidaridad humanitaria. Es también un acto y un llamado colectivo a defender la Memoria revolucionaria; a procurar evitar la consumación de esta degeneración política en curso.

No hay peor latrocinio que la defraudación política de la esperanza de los pueblos.

No hay peor saqueo que aquel que va dirigido a depredar las energías rebeldes por un mundo justo.

No hay peor imperialismo que el colonialismo interno que se torna violencia opresiva revestido con retórica anti-imperial.

Todo eso está aconteciendo en Nicaragua. La Tierra que fuera símbolo fértil de la esperanza emancipatoria a fines de los '70, se ha convertido en un campo más de autoritarismo.

La memoria mancillada de una de las revolu-

ciones más nobles y esperanzadoras de Nuestra América, como lo fue y sigue siendo Sandino; la memoria de luchas anti-capitalistas de un pueblo sufrido pero valiente, ahora pisoteada para (intentar) encubrir la típica violencia ordinaria de un régimen dictatorial más, de esos que sobran y se repiten en nuestra historia. El otrora líder revolucionario, honrado por la confianza de su pueblo, hoy convertido en dictador, ciego de poder y con sus manos manchadas de sangre joven. Tal, el paisaje violentamente amargo de nuestra querida Nicaragua.

Alzamos nuestra voz para condenar públicamente la dictadura en la que se ha convertido el gobierno de Ortega-Murillo. Expresamos nuestra solidaridad para con el pueblo y la juventud hoy, una vez más, levantados en resistencia. Para apoyar y acompañar sus exigencias de diálogo y de paz, de poner fin a un gobierno ilegítimo y criminal que hoy usurpa la memoria sandinista. Lo hacemos con la convicción de que lo se trata no es sólo “salvar el honor” del pasado, sino sobre todo, de rescatar y cuidar las semillas emancipatorias del futuro, que hoy se han puesto en riesgo.

Primeras Firmas

Alberto Acosta (economista, Ecuador), Maristella Svampa (socióloga y escritora, Argentina),

Raúl Zibechi (ensayista y escritor, Uruguay), Horacio Machado Araoz (político, Argentina),

Hugo Blanco (activista, director de “Lucha indígena”, Perú),

Joan Martínez Alier (Revista Ecología política, España),

Pierre Salama (economista, Francia),

Raphael Hoetmer (historiador, Perú),

Manfred Max-Neef (Universidad Austral de Chile),

Yaku Pérez Guartambel (presidente de la Confederación de los Pueblos Kichwas del Ecuador - ECUARUNARI y de Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAO),

Decio Machado (Sociólogo, periodista español radicado en Ecuador),

Pablo Solon (Fund. Solon, Bolivia),

Roberto Gargarella (abogado, constitucionalista, Argentina),

Massimo Modonesi (Unam, México)

Peruanxs en Madrid se movilizan contra la corrupción



La corrupción en todos los estamentos institucionales de Perú no sólo ha provocado movilizaciones en distintas ciudades de Perú y Lima, sino que las protestas se han pasado fronteras. Cientos de peruanos y peruanas residentes en Madrid han salido a la calle para expresar su rechazo a la corrupción y pedir que se vayan todos!

Las movilizaciones se iniciaron el pasado 19 de julio. Un centenar de peruanos y peruanas se concentraron en la cétrica plaza del Callao en el corazón de Madrid para protestar contra la corrupción que corroe a todas las instituciones del Estado en Perú.

El acto de protesta, que también se celebró en otras capitales de Europa y América latina además de Lima, se inició con la emocionante entonación del himno nacional, a cargo de la actriz peruana y feminista, Mercy Bustos. Posteriormente un grupo de mujeres integradas por Ivette Zevallos, María Valencia, Betzira Balta y Carmela leyeron un Manifiesto que se inició recordando el largo recorrido que la corrupción ha tenido y tiene en Perú. Año tras año, con este y otros gobiernos, la corrupción siempre ha estado presente provocando la salida de muchos jóvenes al extranjero para ganarse la vida.

Muchos han sido los recursos económicos que se han despilfarrado y han terminado en el bolsillo de políticos, jueces y funcionarios sin escrúpulos detrayendo recursos públicos para desarrollar la educación y la sanidad.

“Siguen campando y destrozando el país minuto a minuto con el mal uso del poder que se les ha asignado”.

La corrupción no es sólo el tráfico de coimas y sobornos sino también la entrega de los recursos naturales y energéticos a empresas transnacionales sin escrúpulos y con la complicidad de funcionarios y responsables políticos situados en las diferentes instituciones del Estado.

“Desde la entrega de recursos y patrimonio nacional

con privatizaciones y concesiones con precios irrisorios y acuerdos leoninos en contra de los intereses del país, con la desaparición por malversación de la mayor parte de los fondos obtenidos por las privatizaciones, pasando por la compra de las líneas periodísticas de medios de comunicación y financiando diarios chicha, siguiendo por controlar los diversos poderes e instituciones del Estado para ponerlo a disposición de sus intereses grupales y de grupos económicos allegados, ya sea a través de la compra de voluntades, presiones o designaciones irregulares de congresistas, jueces, fiscales y otras autoridades”. Una de las pancartas decía: “El Perú está de luto, recuperemos nuestra patria. Alto a la corrupción”. Además, lavaron la bandera nacional como una forma de protesta por los casos revelados.

Pero la protesta que tuvo una especial incidencia en los medios de la inmigración y movimientos sociales fue la interrupción del acto oficial, organizado por el Consulado, el pasado 28 de julio.

Con gritos: “No hay nada que celebrar”, “La corrupción es la muerte de nuestro país”, “No podemos celebrar. Estamos de luto” un grupo de jóvenes irrumpieron cuando el Cónsul de Perú estaba disertando un grandilocuente discurso. Desplegaron una pancarta que decía: “El Perú está de luto”.

Con esta sorprendente acción, que obligó a los miembros de seguridad a intervenir, expresaron su rechazo ante los últimos casos de corrupción que implican a jueces y fiscales del Consejo Nacional de Magistratura y el Poder Judicial.

Dicha manifestación provocó varias reacciones entre el público presente al recinto, algunos a favor y otros en contra del acto realizado por los jóvenes peruanos y peruanas.

El colectivo de inmigrantes peruanos y peruanas es una organización horizontal, inclusiva y con mucha presencia de mujeres. La mayoría son jóvenes, especialmente sensibilizadas por temas de corrupción, democracia, derechos humanos, violencia machista

entre otros temas.

Un colectivo muy activo que se reúne casi cada semana a pesar de las altas temperaturas que está soportando la capital ibérica.

Mantiene contactos con diversos colectivos españoles y personas de referencia en la comunidad latina. Extiende sus redes más allá de Madrid.

Por otro lado, impulsan nuevos métodos de participación. Los temas y acciones se proponen en asamblea, se discute y se decide. Posteriormente se trabaja en comisiones y cada comisión rinde cuentas. Se autogestiona la financiación y combinan las reivindicaciones con actividades de ocio y esparcimiento.

Muchos fines de semana quedan para cenar, conversar y compartir sus alegrías y preocupaciones. Amplían su red de apoyo efectivo a compatriotas que están en situación precaria.

Muchos son los colectivos españoles que les tiene mucha estima por la forma de trabajo que tienen. Las mujeres de este colectivo de peruanos y peruanas están vinculadas o mantienen relación con el movimiento feminista de Madrid.

Para el próximo sábado 4 de agosto tiene programado celebrar unas jornadas bajo el título: “Construyendo nuestra Memoria: Perú 1980-2000”. Presentarán un trabajo colectivo dirigido a los vecinos y vecinas de un barrio obrero de Madrid pero también dirigido a jóvenes peruanos y peruanas para, por un lado, informar e ilustrar los años de la guerra interna que vivió Perú y explicar sus causas y consecuencias. Una interesante y necesaria actividad para no perder la memoria de hechos históricos que más de dos generaciones sufrieron.

Muchas de las peruanas y peruanos que residen en Perú son conscientes de que se encuentran en España porque en su país, Perú, hubo guerra, unos responsables, hubo y hay corrupción y unos responsables y esas consecuencias han hecho emigrar y pasar por calamidades

Por: Pepe Mejía, desde Madrid

